

Resultados de las mediciones de coca en Colombia

Cuestión de método

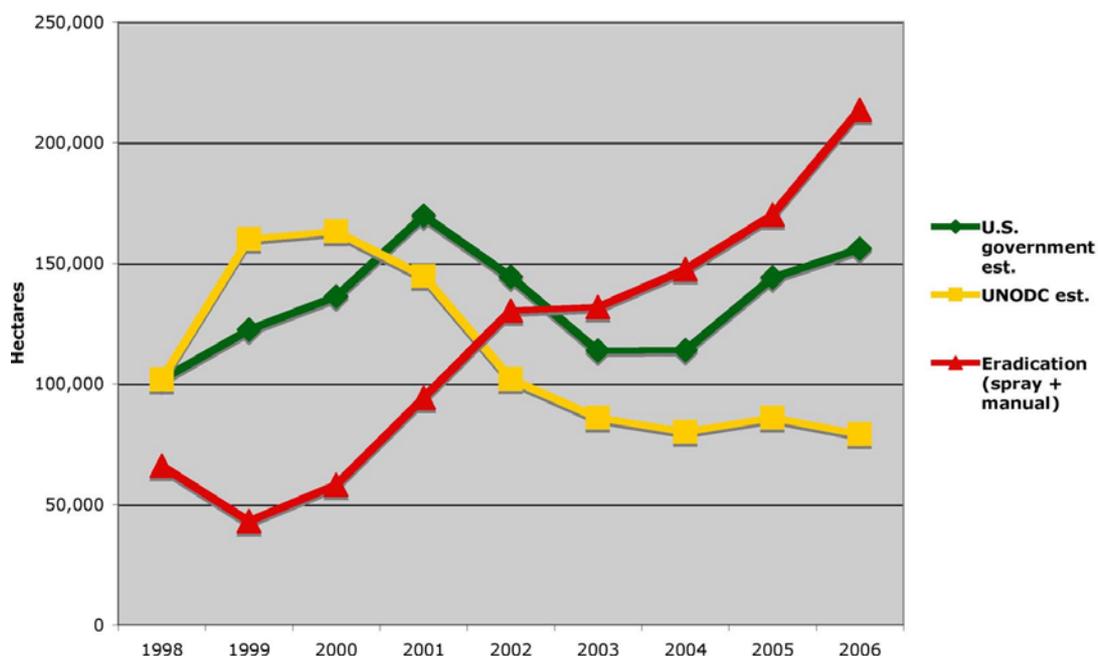
Por primera vez un presidente colombiano en ejercicio dejó entrever recientemente que algo debía estar fallando en la política de drogas aplicada en el país. Al enterarse del incremento en el área cultivada según las mediciones que hace la oficina estadounidense de control de drogas ONDCP, un decepcionado y confundido Álvaro Uribe se preguntó si todo el trabajo hecho contra las drogas no habría sido en vano. Razón no le faltaba. En 2006, a pesar de que fue el año de mayor fumigación en la historia del país, se registraron unas 157.200 hectáreas, 13.200 hectáreas más de coca con respecto a 2005. ¿Estará fallando la estrategia de las fumigaciones?

Pero ésta sólo fue una primera reacción de desconcierto ante la noticia del aumento. El gobierno colombiano insiste en que las fumigaciones sí han sido efectivas y como prueba de ello, ahí están los resultados de las otras mediciones, las que realiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito ONUDD y que son las únicas que se tienen en cuenta en Colombia. Resulta un tanto paradójico que en Colombia sólo se miren las cifras de la ONU y no las del gobierno estadounidense, cuando el que da los fondos para las fumigaciones es este último y no Naciones Unidas. Y es más curioso aún que Estados Unidos, como principal financiador del programa de aspersión aérea, persista en éste a pesar de sus propias estadísticas. Este es el tercer año consecutivo en que, de acuerdo a la ONDCP, se produce un incremento de la superficie cultivada. ¿Cómo lo explican? ¿O será que también ellos secretamente prefieren mirar los números, más convenientes, de la ONU? De otra parte, si EEUU sólo toma en consideración sus propias cifras, entonces ¿para qué sirven las cifras de la ONU? ¿Quizás para ver si se logra convencer a Europa y al resto del mundo?

RECOMENDACIONES

- La política dirigida a atacar el lado de la oferta no ha garantizado una reducción de la cocaína en el mercado internacional. En Colombia existe un consenso favorable a un cambio en la actual política de drogas. Dada la coyuntura de discrepancia entre la Casa Blanca y el Congreso en Washington, Colombia podría aprovechar el momento para proponer una revisión de la actual estrategia y una nueva orientación enfocada en lo social.
- Una reducción gradual de las hectáreas cultivadas debe correr pareja con el correspondiente aumento de los ingresos alternativos y el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades.
- Con o sin fondos de EEUU, Colombia no debe proseguir las fumigaciones. En su lugar se debe ampliar los programas de erradicación manual concertada. Esta debe implementarse en el marco de proyectos de desarrollo sanos que no signifiquen la desterritorialización de los campesinos como sucede con los actuales megaproyectos, sino por el contrario incentiven la pertenencia del campesinado a sus regiones.
- El gobierno estadounidense está intentando repetir en Afganistán el modelo antinarcóticos aplicado en Colombia. Un claro reconocimiento por parte del sistema de la ONU, y de la Unión Europea y los países miembros de los efectos contraproducentes de este modelo, contribuiría a frenar tal iniciativa para Afganistán, y le facilitaría a Colombia el camino hacia nuevas estrategias.

Coca in Colombia, 1998-2006



Fuente: Center for International Policy, CIP

Las autoridades antinarcóticos han tratado de minimizar la gravedad de la acentuada diferencia entre las dos mediciones –una diferencia de casi 80.000 hectáreas en 2006- aludiendo a un problema de metodología. Que se pongan de acuerdo en la metodología, dijo entonces irritado el presidente Uribe, como si esa fuera la solución. Una controversia sobre los métodos para realizar las mediciones lo único que hace es opacar el asunto central de la efectividad de la política de drogas aplicada. En ambos casos –también en el caso de que sólo se quieran reconocer los resultados de la ONU- la conclusión más clara es la de que las fumigaciones no están funcionando, sólo han servido para desplazar los cultivos a nuevas zonas con las consecuencias medioambientales que esto significa, mientras la productividad se mantiene, y el narcotráfico sigue más activo que nunca. No se trata solamente de que se pongan de acuerdo, se trata de que revelen la verdad y que saquen las conclusiones lógicas que se deben sacar de esos resultados.

Tan vergonzosos debieron parecerles este año los resultados a la administración de Bush, que aunque se acostumbra publicarlos en el mes de abril, prefirió mantenerlos ocultos hasta comienzos de junio, para evitar un posible impacto mediático que pudiera afectar el lobby colombiano en Washington en dos puntos clave que se barajan en estos momentos: la continuación de los fondos para el Plan

Colombia y la aprobación del Tratado de Libre Comercio. A estas alturas ya se sabe que el Plan Colombia sigue adelante, con recortes, y con una inclinación menos militarista que la de años anteriores, una decisión que se habría tomado de todos modos con aumento o no de los cultivos. Y por el lado del TLC, nadie ignora que tras ello se mueve un complejo juego de intereses de parte y parte que nada tiene que ver con la cantidad de coca que haya en el país.

Precio y pureza de la cocaína

El truco de retrasar la divulgación de información importante por temor al impacto mediático se vio también recientemente cuando el director de la ONDCP, John Walters, reveló de manera muy discreta y sigilosa la caída de los precios de la cocaína y el incremento de su pureza en las calles de las ciudades estadounidenses. Estados Unidos mide el éxito de su política antinarcóticos en la disponibilidad de la droga en el país. Los precios bajos son señal de alta disponibilidad, de ahí la discreción para que no se enterara la prensa y la opinión pública y comenzaran a preguntarse para qué han servido los billonarios fondos invertidos en la lucha a las drogas.

Aunque conocen perfectamente las fluctuaciones de los precios de la cocaína, como los resultados no les son ventajosos, los altos funcionarios de la

administración de Bush prefieren no mencionarlos para poder seguir refiriéndose públicamente a los 'éxitos' del Plan Colombia. "El Plan Colombia ha comenzado a cambiar los datos bastante atrasados del precio y los niveles de pureza de la cocaína en Estados Unidos. Esta es una señal esperanzadora..."¹ dijo Robert Charles ex subsecretario de la oficina internacional de narcóticos de Estados Unidos en un artículo publicado en la prensa estadounidense a fines de abril. Y en mayo, con motivo de una de las varias visitas recientes del presidente Uribe a Washington, el señor John Negroponte, subsecretario de estado, felicita al presidente colombiano por los éxitos de la política antinarcóticos. O la administración Bush no lee sus propios informes o hay un claro interés de engaño.

Por el lado del narcotráfico

La cantidad de cultivos de coca y la pureza y precios de la cocaína son sólo dos de los frentes observables para determinar la efectividad de la guerra a las drogas. Un reciente documento de la oficina en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD² se interroga si Colombia está ganando la lucha contra el narcotráfico. Si medir los cultivos se ha revelado tan difícil, qué no será medir frentes más complejos de cuantificar como son los ligados al narcotráfico, particularmente en un país como Colombia en donde el narcotráfico ha penetrado amplios sectores de la sociedad, incluidas las altas esferas de la política y de la economía. A tal grado ha llegado el poder y control de las mafias que el desmonte de las estructuras paramilitares asociadas al comercio de drogas y el encarcelamiento de los principales jefes no ha garantizado el fin del negocio. Como lo ha revelado ampliamente la prensa colombiana, las actividades ilícitas se siguen manejando desde la cárcel, los políticos pactan con el narco paramilitarismo acuerdos para repartirse las regiones y 'reestructurar' el Estado, los grandes empresarios y las multinacionales extranjeras³ financian actividades ilegales de grupos delictivos ligados al narcotráfico. Ya se habla de una tercera generación de paramilitares. Nada más que por esto, ¿quién dice que le estamos ganando la guerra al narcotráfico?

También en este ámbito, en el que el gobierno colombiano y EEUU miden los resultados en términos de los golpes propinados a la narco insurgencia, particularmente a las FARC, las

autoridades ajustan la información a su acomodo. Pero diversos análisis de seguridad en Colombia demuestran que ni "las FARC no han sido golpeadas de manera crítica",⁴ ni haber dirigido todas las baterías contra la insurgencia ha disminuido la producción y los envíos de droga al exterior. Peor aún, haber concentrado los ataques sobre las FARC ha tenido el efecto perverso de concederle ventaja al narcotráfico puro y duro para operar más tranquilamente.

El traslado de los cultivos y de las actividades del narco de una región a otra, observable en todas las mediciones hechas año tras año es la evidencia más indiscutible del fracaso del Plan Colombia en estos dos ámbitos. El departamento de Nariño es hoy un buen ejemplo de esta situación. Las fumigaciones en el vecino Putumayo movieron hacia Nariño los cultivos, y con esto las actividades de los grupos armados - entre los cuales los nuevos grupos rearmados de paramilitares- que han hecho de éste uno de los lugares más violentos del país. El traslado de un problema de una región a otra no es un éxito, es nada más un cambio de ubicación. Un nuevo cambio de ubicación de las operaciones ilegales parece estar produciéndose en estos momentos desde Nariño a lo largo de la costa pacífica hacia el puerto de Buenaventura en donde se han registrado últimamente hechos que delatan una guerra por ocupación de territorio para el narcotráfico.

Regalo envenenado

Ante la noticia del recorte del Plan Colombia, el presidente Uribe reaccionó con un refrán popular, "A caballo regalado no se le mira el diente". Pero el Plan Colombia no es un caballo sino un error. Incluso el lado suave del Plan, su componente social que supuestamente se reforzará en la segunda parte, no está exento de controversia y fracasos. Los programas de desarrollo alternativo del Plan Colombia hacen parte de megaproyectos (palma aceitera y madera) de origen dudoso relacionado con extorsión y expropiación de territorios a comunidades indígenas, y afrocolombianas. El Plan Colombia podría ser más bien lo que también en la sabiduría popular se llama un 'regalo envenenado'. Metafórica y literalmente, en este caso. Uno de esos regalos que uno preferiría no recibir.

Estados Unidos tiene intereses políticos y de seguridad en los que está involucrado Colombia, los cuales explican que se ignoren hechos, estadísticas, y la larga experiencia de varias décadas en asuntos de antinarcóticos, con tal de mantener activa una 'guerra a las drogas' que les garantiza presencia en zonas estratégicas. Pero si esto es verdad para EEUU, no lo es para la Unión Europea, ni para la entidad multilateral encargada de la política de drogas como es la ONUDD, ni para el resto del mundo. Con base en los hechos, estadísticas y experiencia habida, la comunidad internacional debería reaccionar en consecuencia y atreverse a reconocer que el Plan Colombia no ha representado un éxito sino todo lo contrario. Este reconocimiento ha debido suceder en realidad hace años, de modo que el país se hubiera ahorrado el gasto económico, el deterioro ambiental, el impacto en la salud de la población más pobre, y todos los perjuicios asociados a las masivas aspersiones.

Otro punto en el que los monitoreos respectivos de Estados Unidos y de la ONU no coinciden ampliamente es en el análisis de la situación de derechos humanos. Mientras el Departamento de Estado –ignorando los numerosos hechos graves en los que se vio implicada en 2006 la fuerza pública colombiana- ‘certificó’ a Colombia por estar cumpliendo con los criterios de respeto a los derechos humanos, en su último informe del pasado mes de marzo, la ONU hizo notar el aumento en 2006 de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y desapariciones forzadas adjudicadas a las fuerzas armadas. Según estudios del Acnur, habría más de tres millones de desplazados internos en Colombia, haciendo de éste el segundo país del mundo, después de Sudán, con más población desplazada como consecuencia del conflicto armado.

A Estados Unidos le interesa convencer a sus contribuyentes, que son los que ponen la plata, de las bondades del Plan. Pero ¿por qué tienen Europa y la ONU que seguirle haciendo el juego a esta política? Es verdad que Europa se distanció desde el comienzo del enfoque del Plan Colombia prefiriendo canalizar sus recursos por otras vías, pero no ha mostrado la suficiente asertividad en la desaprobación de esta estrategia. ¿Y por qué tiene que hacerlo el mismo gobierno colombiano, especialmente ahora que el gobierno de Bush no cuenta con las mayorías necesarias para darle el respaldo que promete? ¿Y

por qué tienen que seguirlo soportando los colombianos que son los que ponen el territorio y las víctimas?

¹ Charles, R., *Foreign Policy and Colombia*, Washington Times, April 24, 2007

² PNUD, Hechos del Callejón, ¿Colombia está ganando la lucha contra el narcotráfico?, Junio 2007 -

[Hhttp://indh.pnud.org.co/files/boletin_hechos/as_i_opt.pdf](http://indh.pnud.org.co/files/boletin_hechos/as_i_opt.pdf)

³ La empresa Chiquita Brands International reconoció recientemente haber llegado a acuerdos financieros con grupos de autodefensas sindicados de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico.

⁴ Alfredo Rangel, *Observatorio de Seguridad Suramericano*, Fundación Seguridad y Democracia, Marzo de 2007

TRANSNATIONAL INSTITUTE
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam –
Netherlands
tel.: + 31 20 662 66 08
Fax: + 31 20 675 71 76
E-mail: drugs@tni.org